

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI  
SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>CLASE DE PROCESO:</b>   | <b>ORDINARIO LABORAL</b>                                       |
| <b>DEMANDANTE:</b>         | <b>PATRICIA QUINTANA POTES</b>                                 |
| <b>DEMANDADOS:</b>         | <b>COLPENSIONES, PROTECCION S.A, SKANDIA S.A, PORVENIR S.A</b> |
| <b>RADICACIÓN:</b>         | <b>76001 31 05 018 2022 00013 01</b>                           |
| <b>JUZGADO DE ORIGEN:</b>  | <b>JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI</b>          |
| <b>ASUNTO:</b>             | <b>APELACION Y CONSULTA, INEFICACIA DE TRASLADO.</b>           |
| <b>MAGISTRADA PONENTE:</b> | <b>MARY ELENA SOLARTE MELO</b>                                 |

**ACTA No. 063**

**Santiago de Cali, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022)**

Conforme lo previsto en el Art. 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, integrada por los Magistrados ANTONIO JOSE VALENCIA MANZANO, GERMAN VARELA COLLAZOS y MARY ELENA SOLARTE MELO quien la preside, previa deliberación en los términos acordados en la Sala de Decisión, procede a resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES y los recursos de apelación interpuesto contra la sentencia No. 080 del 08 de abril de 2022, proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali, y dicta la siguiente decisión:

**SENTENCIA No. 302**

**1. ANTECEDENTES**

Pretende se declare la nulidad del traslado realizado del RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA -RPM- al RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD – RAIS-, se ordene su regreso automático al RPM.

Las demandadas COLPENSIONES, SKANDIA S.A., PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., contestaron la demanda.

### **DECISION DE PRIMERA INSTANCIA**

El JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI por sentencia No. 080 del 08 de abril de 2022, DECLARÓ no probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas. DECLARÓ la ineficacia del traslado al RAIS; CONDENÓ a SKANDIA S.A. a trasladar a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante como cotizaciones, rendimientos, bonos pensionales, gastos de administración, comisiones, entre otros; CONDENÓ a PORVENIR S.A. y PROTECCION S.A. a trasladar indexada y con cargo su propio peculio las cuotas de administración, entre otros; ORDENÓ a COLPENSIONES acepte el traslado de la demandante sin solución de continuidad ni cargas adicionales; CONDENÓ en costas a COLPENSIONES, PORVENIR S.A., PROTECCION S.A. y SKANDIA S.A.

### **RECURSO DE APELACIÓN Y CONSULTA**

La apoderada judicial de COLPENSIONES expone que la entidad no participó en el acto que se declara ineficaz, y el sustento de la decisión guarda relación con una conducta desplegada por un tercero ajeno a esta administradora; que respondió de forma oportuna a la solicitud de afiliación, negándola por ser improcedente el traslado de régimen en virtud del artículo 2 literal e) de la Ley 797 de 2003. Reitera que no era la entidad competente para declarar la nulidad de la afiliación, si bien es cierto es llamada al proceso para que reciba los dineros, no es la responsable de los actos generadores de la presente acción, y solicita se revoque la condena en costas.

La apoderada judicial de SKANDIA S.A. indica que al momento de la afiliación se cumplió a cabalidad con el deber de información que le era exigido. Pone de presente que no tuvo injerencia en el traslado de régimen pensional, el que fue realizado a través de PORVENIR S.A.. Dice son improcedentes las condenas impuestas, al realizarse la afiliación en cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias. Señala que al declarar la ineficacia se entiende que nunca existió el traslado, sin embargo, resultan improcedentes las devoluciones ordenadas, por actuar la entidad cumpliendo las obligaciones legales, y además al

entender que nunca estuvo afiliada a SKANDIA S.A., no surgieron a la vida jurídica los rendimientos.

Respecto de los gastos de administración, dice que surgen a favor de los fondos de pensiones con una destinación legal tanto en el RAIS como el RPM, se dan como retribución de la gestión de administración, lo que se traduce en el aumento de los rendimientos que reposan en la cuenta. Indica que no hacen parte del porcentaje de cotización que se utiliza para financiar las prestaciones económicas a las que podía tener derecho, por lo tanto, el descuento se hizo en cumplimiento de un mandato legal. Al ordenar su retorno se estaría en contravía de la confianza legítima y la buena fe en las relaciones jurídicas que surgieron. Señala que las primas de seguro previsional y reaseguro, son rubros que ya no encuentran en cabeza de esta entidad, pues se contrató una aseguradora para amparar los riesgos de sobrevivencia o invalidez. Solicita se absuelva de la condena en costas.

La apoderada judicial de PORVENIR S.A. señala que los gastos de administración tienen una destinación específica. Que en los casos en donde se declare la nulidad o la ineficacia y se condene a devolver los dineros de la cuenta, únicamente será procedente la devolución de los anteriores conceptos más los rendimientos financieros, pero no es procedente ordenar la devolución de los gastos de administración, toda vez que se trata de comisiones ya causadas durante la administración de los dineros de la cuenta de ahorro individual de la demandante y como contraprestación de una buena gestión.

Con respecto al descuento del porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, indica que ese fondo se creó con la Ley 100 de 1993 para proporcionar los recursos necesarios para el pago de pensiones de los afiliados al RAIS que durante su vida laboral no lograron reunir un capital pensional mínimo y necesario para financiar su pensión de vejez, por lo que la entidad realizó el descuento para financiar este fondo. Respecto de las primas de seguro y reaseguro, dice no es procedente su devolución, teniendo en cuenta que también fueron descontadas debidamente y destinadas para cubrir las contingencias de invalidez y sobrevivencia que pudiera ocasionar en algún momento la afiliada. Sobre la condena en costas, la entidad siempre actuó de buena fe, con estricta sujeción a la ley, por lo que, solicita se revoque.

El apoderado judicial de PROTECCION S.A. expresando que los gastos de administración se cobran por la gestión de los recursos y tienen una destinación

específica, estando debidamente autorizados en el RAIS y el RPM, sin que sea procedente su devolución. Señala que si la consecuencia de la ineficacia es que las cosas vuelvan al estado anterior, se debe entender que el contrato de afiliación nunca existió y por ende nunca la AFP debió administrar los recursos, los rendimientos no se causaron y tampoco se debió cobrar una comisión de administración; sin embargo, por las restituciones mutuas, debe entenderse que si se declara la nulidad, los rendimientos corresponden al afiliado y a la AFP la comisión de administración.

Se examina también por grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES -artículo 69 CPTSS, modificado por el artículo 14, Ley 1149 de 2007-.

## **TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA**

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Conforme el Art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se corrió traslado a las partes por un término de cinco (5) días para que presenten alegatos de conclusión.

Dentro del plazo conferido, presentó alegatos de conclusión la parte demandante, PORVENIR S.A, SKANDIA S.A, y COLPENSIONES.

Cabe anotar que los alegatos de conclusión no se constituyen en una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado ante el a quo.

## **2. CONSIDERACIONES**

No advierte la sala violación de derecho fundamental alguno, así como tampoco ausencia de presupuestos procesales que conlleven a una nulidad.

### **2.1. PROBLEMA JURÍDICO**

Con fundamento en las pruebas aportadas al proceso, la Sala procederá a resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿El traslado de régimen del demandante es ineficaz?, o por el contrario, ¿es válida su afiliación al RAIS?, y de ser lo primero, ¿procede su retorno automático al RPM, con la devolución de los dineros recibidos con motivo de su afiliación, en la forma decidida por el *a quo*? También se debe analizar si es viable la condena en costas.

## 2.2. SENTIDO DE LA DECISIÓN

La sentencia **se adicionará**, por las siguientes razones:

Frente a la escogencia de régimen pensional, prevé el artículo 13, literal b) de la Ley 100 de 1993 que: **“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.”**

Y a su vez, de manera expresa el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagró multas y sanciones para el empleador o cualquier persona natural o jurídica que: **“impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral”, con la consecuencia que “La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador (...).”**

Por su parte, el artículo 3° del Decreto 692 de 1994, señala que los afiliados al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, **podrán seleccionar cualquiera de los dos regímenes que lo componen.**

Y a su vez, el inciso 2° del Art. 2 del Decreto 1642 de 1995, que reglamenta la afiliación de los trabajadores al Sistema General de Pensiones, establece que **“La selección de cualquiera de los dos regímenes previstos en la ley es libre y voluntaria por parte del trabajador, y se entenderá efectuada con el diligenciamiento del formulario de afiliación autorizado por la Superintendencia Bancaria”**

La demandante venía vinculada válidamente al RMP desde el 24 de enero de 1995 (fl.28)<sup>1</sup> hasta el 01 de enero de 1998 (fl.73)<sup>2</sup>, fecha en la que se reporta un traslado de régimen a COLPATRIA, luego el 01 de agosto de 1998 (fl.73)<sup>3</sup> a PORVENIR S.A, el 01 de abril de 2001 (fl.73)<sup>4</sup> a PROTECCION S.A, el 01 de junio de 2003 (fl.73)<sup>5</sup> a PORVENIR S.A, después el 01 de abril de 2007 (fl.73)<sup>6</sup> a HORIZONTE, luego el 01 de julio de 2008 (fl.73)<sup>7</sup> a PORVENIR S.A y finalmente se reporta un traslado a SKANDIA S.A, el 01 de octubre de 2019 (fl.17)<sup>8</sup> fondo pensional en el que se encuentra afiliado hasta la fecha.

El artículo 11 del Decreto 692 de 1994, establece que el trámite para la selección y vinculación que implica la aceptación de las condiciones propias del régimen para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, debe ser libre y voluntario por parte del afiliado, manifestando sin lugar a dudas, que exista la voluntad y el consentimiento debidamente informado de cuáles son las condiciones en las que se va a verificar esa vinculación.

Cuando el afiliado se traslade por primera vez del RPM al RAIS, en el formulario se deberá consignar que la decisión de trasladarse se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones, para lo cual el formulario puede contener la leyenda pre impresa en ese sentido, pero esto no libera a las administradoras de la obligación de explicar a los afiliados las condiciones que implican el traslado de un régimen a otro, sus beneficios y desventajas.

A este respecto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en **sentencia del 3 de septiembre de 2014**, radicación 46292, SL12136 MP. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón, puntualizó que para efectos de optar por alguno de los dos (2) regímenes pensionales existentes “...el literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993 dispuso la obligatoriedad de que tal manifestación fuera libre y voluntaria, y contempló como sanción, en caso de que ello no se concretara, una multa hasta de 50 salarios mínimos legales mensuales vigente, además de que «la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador»;...”

<sup>1</sup>Pdf. 11, ContestacionColpensiones, Cuaderno del Juzgado, fl 28

<sup>2</sup>Pdf. 09, ContestacionPorvenir, Cuaderno del Juzgado, fl 73

<sup>3</sup>Pdf. 09, ContestacionPorvenir, Cuaderno del Juzgado, fl 73

<sup>4</sup> Pdf. 09, ContestacionPorvenir, Cuaderno del Juzgado, fl 73

<sup>5</sup> Pdf. 09, ContestacionPorvenir, Cuaderno del Juzgado, fl 73

<sup>6</sup> Pdf. 09, ContestacionPorvenir, Cuaderno del Juzgado, fl 73

<sup>7</sup> Pdf. 09, ContestacionPorvenir, Cuaderno del Juzgado, fl 73

<sup>8</sup>Pdf. 10, ContestacionSkandia, Cuaderno del Juzgado, fl 17

Refiere además la Corporación que, cuando están en juego aspectos tan trascendentes como la conservación del régimen de prima media con ley 100 de 1993 y sus reformas, o la imposibilidad de acceder a la pensión de vejez, se hace necesario, que las entidades encargadas de su dirección y funcionamiento, garanticen que existió una decisión informada, y que esta fue verdaderamente autónoma y consciente, de otro modo no puede explicarse el cambio de un régimen al otro, pues a su juicio, **“no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito.”**

Además, ha establecido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, las AFP tiene el deber de brindar información a los afiliados o usuarios sobre el sistema pensional, correspondiendo a los jueces evaluar el cumplimiento de esta obligación; sin que sea suficiente para acreditar el cumplimiento de este deber, el simple consentimiento plasmado en el formulario de afiliación, por lo que se requiere de un «consentimiento informado», pues se trata de que el afiliado tenga elementos de juicio que le permitan evaluar la trascendencia de la decisión que adopta, correspondiendo la carga de la prueba respecto a estos aspectos relacionados con el suministro de información a los fondos de pensiones, operando una inversión de la carga probatoria en favor del afiliado demandante<sup>9</sup>.

Además, la Corte Suprema en Sentencia SL1452-2019, sostuvo:

*“Con estos argumentos la Sala ha defendido la tesis de que las AFP, desde su fundación e incorporación al sistema de protección social, tienen el «deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad», premisa que implica dar a conocer «las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes»,*

---

<sup>9</sup> CSJ SL 31989, 9 sep. 2008; CSJ SL 31314, 9 sep. 2008; CSJ SL 33083, 22 nov. 2011; CSJ SL12136-2014; CSJ SL19447-2017; CSJ SL4964-2018; CSJ SL4989-2018; SL19447-2017; SL 1452-2019; SL 4360-2019.

*como podría ser la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales (CSJ SL 31989, 9 sep. 2008).*

*Y no podía ser de otra manera, pues las instituciones financieras cuentan con una estructura corporativa especializada, experta en la materia y respaldada en complejos equipos actuariales capaces de conocer los detalles de su servicio, lo que las ubica en una posición de preeminencia frente a los usuarios. Estos últimos, no solo se enfrentan a un asunto complejo, hiperregulado, sometido a múltiples variables actuariales, financieras y macroeconómicas, sino que también se enfrentan a barreras derivadas de sus condiciones económicas, sociales, educativas y culturales que profundizan las dificultades en la toma de sus decisiones. Por consiguiente, la administradora profesional y el afiliado inexperto se encuentran en un plano desigual, que la legislación intenta reequilibrar mediante la exigencia de un deber de información y probatorio a cargo de la primera”.*

Ahora, respecto al deber de información en la sentencia SL1452-2019, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral hace una amplia explicación de la evolución que ha tenido, dividiéndolo en etapas. La corporación sostiene que la prestación de un servicio público esencial con la incursión en el sistema de seguridad social de actores privados, como es el caso de las AFP del RAIS, ha estado desde un principio, sujeta a las restricciones y deberes que la naturaleza de sus actividades implicaba, entendiendo que la escogencia *libre y voluntaria* del régimen pensional necesariamente implica *conocimiento*, el cual solo se obtiene cuando se “saben a plenitud las consecuencias de una decisión de esta índole”. Encontrándose este aspecto establecido desde el Decreto 663 de 1993, y posteriormente en Ley 795 de 2003, la Ley 1328 de 2009, el Decreto 2241 de 2010 incorporado al Decreto 2555 de 2010, la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera.

Para efectos ilustrativos se transcribe el cuadro de etapas traído en la sentencia mencionada en precedencia.

| <b>Etapas acumulativas</b> | <b>Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información</b> | <b>Contenido mínimo y alcance del deber de información</b>         |
|----------------------------|--|--|
| Deber de información       | Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993                           | Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003<br>Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal | riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales  |
| Deber de información, asesoría y buen consejo                  | Artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009<br>Decreto 2241 de 2010  | Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo |
| Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría. | Ley 1748 de 2014<br>Artículo 3 del Decreto 2071 de 2015<br>Circular Externa n. 016 de 2016   | Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.  |

Acorde con lo anterior, era necesario e imprescindible que los fondos de pensiones del RAIS, al momento de suscribir el formulario de vinculación con el cual se dio el traslado de régimen y los traslados entre administradoras, le suministrara al afiliado una “suficiente, completa y clara información sobre las reales implicaciones que le conllevaría dejar el anterior régimen y sus posibles consecuencias futuras”, situación que no aconteció, pues reposa en el expediente la suscripción de un formulario “solicitud de vinculación” por parte de SKANDIA S.A (fl.19)<sup>10</sup> y PORVENIR S.A (fl.75-78)<sup>11</sup>, situación que no resulta suficiente para lograr este cometido, pese a que en él se impone en forma genérica la leyenda de que la escogencia del Régimen de Ahorro Individual se realizó “en forma libre, espontánea y sin presiones”.

Así pues, no se demuestra que las AFP del RAIS hayan desplegado una verdadera actividad de asesoramiento de lo que en últimas representaba dicho acto jurídico de incorporación al RAIS, pues lo cierto es que no se realizó ninguna proyección sobre

<sup>10</sup> Pdf. 10, ContestacionSkandia, Cuaderno del Juzgado, fl 19

<sup>11</sup> Pdf. 09, ContestacionPorvenir, Cuaderno del Juzgado, fl. 75-78

la posible suma a la que ascendería su pensión en comparación con lo que percibiría si continuaba en el RPM, cotejando con las modalidades y condiciones a los que tendría derecho en el RAIS, ni se le informó respecto de la diferencia en el pago de aportes, y demás condiciones y diferencias entre los dos regímenes pensionales, así como beneficios y desventajas, con lo cual se concluye que no ha cumplido con la carga probatoria que les incumbe a la luz de lo dicho por la jurisprudencia.

No hay prueba en el expediente, y tenía SKANDIA S.A, PROTECCION S.A. y PORVENIR S.A., la carga de acreditar esa diligencia de conformidad con el artículo 1604 del CC., omisión con la cual se genera la ineficacia del cambio de régimen, en razón a que la vinculación o afiliación al RAIS en estos términos no es válida.

Respecto de las implicaciones como consecuencia de la ineficacia y/o nulidad del traslado, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL4360-2019, estableció que, tanto para la ineficacia como para la nulidad del traslado de régimen, “...que las consecuencias prácticas de la primera declaración son idénticas a la de la segunda...” y esta es que se debe declarar que “...el negocio jurídico no se ha celebrado jamás”, adicionalmente en sentencia SL 556-2022 sobre los efectos de la ineficacia del traslado determinó:

*“En cuanto a los efectos que conlleva la ineficacia del acto de traslado —con ocasión del incumplimiento del deber que les asiste a las administradoras de suministrar la información necesaria para que el afiliado tome una decisión libre y veraz—, es pertinente recordar que se contraen a la devolución de los dineros que el fondo hubiera recibido, entre otros, por concepto de las cotizaciones y los bonos pensionales —si fuere el caso—, además de los rendimientos financieros que se hubieren causado.”*

Adicionalmente, recientemente en el propio tribunal de cierre laboral en sentencia SL 584-2022, determinó que las AFP’s al declararse una ineficacia y/o nulidad de traslado deben trasladar las comisiones y gastos de administración cobrados a la demandante, así como los valores utilizados en seguros previsionales y la garantía de pensión mínima, así:

*“Así mismo, con cargo a lo explicado en providencia CSJ SL3199-2021, atrás citada, también debe modificarse el fallo del a quo, para condenar a COLFONDOS S.A. a trasladar a Colpensiones las comisiones y gastos de administración cobrados a la demandante, que deberá indexar, así como los*

*valores utilizados en seguros previsionales y la garantía de pensión mínima, que le corresponderá asumir con cargo a sus propios recursos. Lo anterior, se repite, dado que la declaratoria de ineficacia presupone que el administrador del régimen de prima media reciba los recursos por aportes de la afiliada, como si el acto de traslado nunca hubiera existido.”*

También se pueden consultar las sentencias SL 31989-2008, SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019, SL1688-2019, SL 3464-2019 y SL4360-19.

Respecto de las sumas adicionales de las aseguradoras, se debe señalar que se condena a la devolución del porcentaje destinado a financiar las primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, mismos que hacen parte del porcentaje de gastos de administración, en los términos del Art. 20 de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, resulta procedente la condena impuesta por el a quo, debiendo confirmar la decisión.

No prospera la prescripción, pues en tratándose de derechos en materia de seguridad social, como lo es la libre escogencia de régimen, se tornan imprescriptibles e irrenunciables conforme lo señala el artículo 48 de la CP y la jurisprudencia<sup>12</sup>.

En cuanto a la condena en costas impuesta en primera instancia, es preciso traer a colación el inciso 1 del artículo 365 del CGP, que señala que se condena en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación o revisión que haya propuesto, obedeciendo la misma a factores objetivos, por lo que no son de recibo los argumentos esgrimidos por COLPENSIONES.

En cuanto a la condena en costas impuesta en primera instancia, es preciso traer a colación el inciso 1 del artículo 365 del CGP, que señala que se condena en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación o revisión que haya propuesto, obedeciendo la

---

<sup>12</sup> CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019 y CSJ SL1689-2019, CSJ SL2817-2019, CSJ SL4360-2019, CSJ SL4559-2019,

misma a factores objetivos, por lo que no son de recibo los argumentos esgrimidos por COLPENSIONES, SKANDÍA S.A. y PORVENIR S.A.

Costas en esta instancia a cargo de COLPENSIONES, PORVENIR S.A., PROTECCION S.A. y SKANDIA S.A., en favor del demandante, dada la no prosperidad de la alzada. No se causan costas por la consulta <artículo 392 CPC, modificado artículo 365 CGP, aplicable por analogía, artículo 145 CPTSS>.

***En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,***

**RESUELVE:**

**PRIMERO.- CONFIRMAR** la sentencia No. 080 del 08 de abril de 2022 proferida por el **JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI**.

**SEGUNDO.- COSTAS** en esta instancia a cargo de **COLPENSIONES, PROTECCION S.A., PORVENIR S.A. Y SKANDIA S.A.** en favor del demandante. Se fijan como agencias en derecho un valor de \$1.000.000. Sin costas por la consulta. Las costas impuestas serán liquidadas conforme el Art. 366 del C.G.P.

**QUINTO.-NOTIFIQUESE** esta decisión mediante inserción en la página web de la Rama Judicial. <https://www.ramajudicial.gov.co/web/despacho-006-de-la-sala-laboral-del-tribunal-superior-de-cali/16>

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**MARY ELENA SOLARTE MELO**

**Con firma electrónica**

  
**ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO**

  
**GERMAN VARELA COLLAZOS**

**Firmado Por:**  
**Mary Elena Solarte Melo**  
**Magistrado Tribunal O Consejo Seccional**  
**Sala 006 Laboral**  
**Tribunal Superior De Cali - Valle Del Cauca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ef6035e65cf417b848d7955138f1b9d601965cd7969c982a9c9f051a971cf86d**

Documento generado en 31/08/2022 07:30:38 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**